



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, treinta de junio de dos mil veintitrés

22-001

Proceso: ORDINARIO LABORAL- Apelación.
Demandante: **MARIA CRISTINA VERGARA GALVÍS**
Demandado: **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A., OLD MUTUAL hoy SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-004-2017-01050-01.
Tema: **Ineficacia Traslado**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, Colfondos S.A. y Porvenir S.A contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 21** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante, que tras la declaratoria de **INEFICACIA** del traslado a las administradoras del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad. En consecuencia que se ordene a OLD MUTUAL S.A. hoy SKANDIA S.A. trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes incluyendo los rendimientos que reposen en su cuenta de ahorro individual. Consecuencialmente solicita que se ordene a COLPENSIONES recibir dichas sumas y reactivar la afiliación en el sistema

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que se afilió al ISS hoy COLPENSIONES el 1º de enero de 1995 cotizando un total de 227.14 semanas.
- ✓ Que se encontraba afiliada al ISS el 01 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
- ✓ Que el 15 de mayo de 2000 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual afiliándose a la AFP Horizonte, hoy Porvenir, momento en el cual el asesor le indicó que si continuaba en el ISS no se iba a poder pensionar dado que dicha entidad se iba a acabar, además le dijo que en el RAIS podía pensionarse a menor edad, pero sin explicarle la afectación que esto tendría en su mesada pensional, además no le habló del bono pensional ni le informó sobre las ventajas y desventajas que implicaba dicho traslado, así como tampoco le dijo que si deseaba regresar al régimen de prima media debía hacerlo antes de cumplir los 47 años de edad
- ✓ Que actualmente se encuentra afiliada a Skandia S.A. y cuenta con más de 1.067 semanas cotizadas en el sistema general de pensiones.
- ✓ Que el 25 de julio de 2017 envió derecho de petición a Porvenir S.A solicitando la invalidación de la afiliación, pero le fue negada bajo el argumento de que la entidad no cuenta con los elementos de juicio suficientes para dejar sin efectos la afiliación.
- ✓ Que el 27 de julio de 2017 radicó formulario de traslado de régimen ante Colpensiones, pero le fue negado por estar a menos de diez años de adquirir el derecho a pensionarse.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido.

En primer lugar se pronunció **SKANDIA** que argumentó que la demandante estaba previamente afiliada a Colfondos y es por ello que tenía conocimiento de las ventajas, características, funcionamiento y demás componentes del RAIS. Por lo tanto, la asesoría era tomada como una reafirmación de los argumentos ya conocidos. Agregó que el acto jurídico celebrado es totalmente válido, pues cumplió con los requisitos legales sin ocasionarle a la actora ningún tipo de perjuicio y que el formulario de afiliación fue suscrito en dos ocasiones, inicialmente cuando se trasladó de Colfondos y posteriormente cuando regresó de la misma entidad en el 2012.

De otro lado **COLPENSIONES** aceptó los hechos relativos a la solicitud de traslado de régimen y la respuesta negativa de la misma. Sobre los demás indicó que no le constan.

Por su parte **PORVENIR** negó el incumplimiento del deber de información al señalar que la demandante recibió la asesoría suficiente, completa y detallada conforme a las disposiciones legales vigentes para la época, pues bastaba con brindar la información y suscribir el formulario de afiliación. Así mismo indicó que la demandante tuvo tres traslados entre fondos del mismo régimen ratificando así su voluntad de permanencia en el RAIS. En cuanto a los demás hechos manifestó que no le constan por lo que deberán ser probados.

Finalmente, **COLFONDOS** rechazó la afirmación temeraria de la demandante en la que indica que fue engañada para realizar la afiliación. Frente a ello, la AFP argumentó que desde su nacimiento ha contado con un departamento especializado donde capacita sobre el sistema general de pensiones a todos sus funcionarios y especialmente a sus asesores comerciales para que puedan explicar de manera satisfactoria las características, particularidades, bondades y limitaciones de ambos regímenes.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 12 de noviembre del año 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín declaró no sólo la ineficacia de la afiliación al RAIS, sino además que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. CONDENÓ a SKANDIA S.A. trasladar a Colpensiones dentro los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo los valores de la cuenta de ahorro individual incluyendo los aportes, cotizaciones y rendimientos, así como también los gastos de administración, pagos de seguro y reaseguro y pagos destinados al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados.

ORDENÓ a COLFONDOS y PORVENIR remitir a Colpensiones los gastos de administración, pagos de seguro y reaseguro y pagos destinados al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados y con cargo al patrimonio de cada una de ellas durante el tiempo de afiliación de la demandante.

De otro lado, ORDENÓ a COLPENSIONES recibir tales sumas y reactivar la afiliación de la actora en dicho fondo, imponiéndole como MEDIDA CAUTELAR que no podía negar el reconocimiento pensional aduciendo que no le habían remitido los valores de la cuenta de ahorro individual a satisfacción y equivalencia.

Finalmente condenó en costas a Porvenir S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$3.000.000 a favor de la demandante.

Dentro del término concedido por la ley Colpensiones, Porvenir y Colfondos interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

Frente a la medida cautelar innominada consideró pertinente su imposición oficiosa, al señalar que podría ponerse en riesgo el derecho pensional especialmente si se tenía en cuenta que la actora ya satisfacía el requisito de la edad, tornándose improcedente someter el derecho al pago de los conceptos que le correspondía retornar a Old Mutual S.A, máxime si Colpensiones contaba con las herramientas para ejecutar el fallo, evitando así ese riesgo fundado y por el contrario garantizando el acceso a la pensión, especialmente si tenía acceso a la historia laboral y se financiaba con una bolsa común de naturaleza pública.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. APELACIÓN PORVENIR

Manifestó que debe revocarse la orden de devolver los gastos de administración, pues de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 en el Régimen de prima media también se genera un descuento para cubrir los gastos de administración, pensión de invalidez y sobrevivencia, además dichos gastos no forman parte integral de la pensión de vejez y por ello no deben ser objeto de la prescripción. Indicó que el ordenar el traslado de estos valores a Colpensiones configuraría un enriquecimiento sin justa causa a favor de esta entidad debido a que no existe norma tal que disponga esta devolución de forma clara, pues el artículo 113 literal b de la Ley 100 de 1993 menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe un cambio de régimen pensional, esto es saldo de la cuenta individual incluidos sus rendimientos, lo que evidencia que los demás valores no están destinados a financiar la pensión, sino que son parte del fondo privado

como contraprestación a la gestión que adelantó para incrementar el capital existente en la cuenta de ahorro individual de la afiliada.

Frente al cobro de las costas señaló que Porvenir es una entidad de carácter particular que funge como una administradora del RAIS de conformidad con las facultades a ella conferidas en la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para todos los efectos del proceso, la administradora es un particular que ha sido convocado en virtud de una demanda instaurada en su contra y por tanto, debe recordarse que en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas debe presumirse la buena fe de las primeras de manera que sus actos de mala fe deben ser demostrados a través de los medios idóneos. Por lo tanto, solicita revocar de manera parcial la sentencia de primera instancia.

2.2.2. APELACIÓN COLFONDOS

Señaló que no está de acuerdo con la orden impuesta a la AFP de devolver los gastos de administración, toda vez que los dineros que se encontraban en la cuenta de ahorro individual de la actora causaron unos rendimientos durante todo el tiempo de permanencia en Colfondos y los mismos ya fueron trasladados a Skandia. Por lo tanto, se generaría un enriquecimiento sin justa causa a favor de Colpensiones. Además adujo que no es pertinente que se ordene la indexación de esas sumas porque al estar en poder de una de las AFP demandadas, los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual están produciendo al día de hoy unos rendimientos mínimos que evitan o compensan la pérdida del poder adquisitivo de dichos rubros.

2.2.3. APELACIÓN COLPENSIONES

Indicó que no está de acuerdo con la medida cautelar impuesta pues si bien Colpensiones es un fondo común no puede responder por prestaciones sociales que ni siquiera han sido debatidas en el curso de este proceso, es decir, debe esperarse que a la demandante le sea reactivada su afiliación en su totalidad, le sea actualizado el histórico laboral de aportes y se haga la solicitud para la prestación económica y en consecuencia Colpensiones se manifieste respecto de tal situación. Señaló que Colpensiones no puede reconocer una prestación económica sin los recursos debidamente trasladados pues no se puede aducir que por ser un fondo común tenga con qué solventarlos, incluso, en virtud del principio de estabilidad financiera requiere que los recursos sean devueltos de forma indexada para cubrir las prestaciones económicas que puedan surgir.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Presentaron alegatos la parte actora, Porvenir y Colpensiones reiterando los argumentos esbozados tanto en la demanda como en las contestaciones y en los recursos de apelación interpuestos estas últimas.

En primer lugar PORVENIR insistió en la improcedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado y de la devolución de los gastos de administración, así como que los mismos se vieron afectados de prescripción. En el mismo sentido COLPENSIONES reiteró que debe garantizarse a dicha entidad que cumpla con la carga impuesta, para la cual se debe ordenar el traslado de las sumas que integran la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, gastos de administración, pagos de seguros y reaseguros fogafín, fondo de garantía de pensión mínima y eventual bono pensional, los cuales deben ser debidamente indexados. Así mismo insistió en que se revoque la medida cautelar impuesta, la cual se torna improcedente, pues la entidad debe recibir los valores del fondo privado para poder garantizar la estabilidad financiera del sistema.

Finalmente la parte actora, señaló que debe confirmarse la sentencia de primera instancia dado que se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para declararse la ineficacia del traslado de la actora al RAIS por incumplimiento al deber de información.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, en el problema jurídico se establecerá a qué haberes le corresponde retornar a las administradoras del RAIS demandadas, analizando especialmente lo atinente a los gastos de administración, si sobre estos operó el fenómeno jurídico de la prescripción y si estos deben ser indexados. Así mismo se estudiará si se debe revocarse la condena en costas impuesta a cargo de Porvenir y si es procedente la imposición de la denominada medida cautelar.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Por ello inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la

ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 15 de mayo de 2000 cuando suscribió el formulario de vinculación a HORIZONTE S.A., hoy Porvenir (fl 88 del archivo 01 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por el ofrecimiento de algunos beneficios, pero sin explicarle realmente como podía acceder a ellos y la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración.

Y es que expresamente la señora MARIA CRISTINA VERGARA GALVÍS en el aludido interrogatorio expuso que es comunicadora social y actualmente es gestora cultural de la Universidad Jorge Tadeo

Lozano. Respecto del traslado a Porvenir adujo que el 15 de mayo del año 2000, se encontraba laborando en dicha Universidad cuando tuvo una asesoría individual de aproximadamente 15 minutos con un asesor de la entidad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías quien le manifestó que era conveniente que se trasladara a este fondo porque el ISS se iba a acabar y que no solo perdería el dinero cotizado hasta el momento, sino que tampoco se podría pensionar, además le dijo que en Horizonte podría pensionarse en cualquier momento y con una mejor mesada, pero no le dijo que su pensión dependería de sus ahorros, tampoco le hablaron de rendimientos, ni de heredabilidad de aportes, ni le dijeron cuál era el porcentaje que debía ahorrar para pensionarse anticipadamente, ni de aportes voluntarios, ni de bono pensional o modalidades de pensión, ni sobre el derecho de retracto. Adujo que no verificó esta información porque confió en el asesor pues también fue quien diligenció el formulario de afiliación. Manifestó que leyó y entendió las preguntas concretas que este documento contenía. Que no ha radicado una queja ante esta entidad con motivo de la falta de información en la que incurrió y que no ha recibido ninguna invitación por parte de Horizonte, hoy Porvenir para afiliarse nuevamente o para recibir una asesoría.

Sobre la MOVILIDAD indicó que en el año 2001 decidió trasladarse a Colfondos porque fue un asunto de recursos humanos de la Universidad, pero que no recuerda si al momento de vincularse estuvo presente un asesor de la entidad, sin embargo, supone que sí y que (de forma individual) le explicó las ventajas de estar en COLFONDOS, que una de ellas posiblemente era *un interés más alto en las inversiones*. Que no le preguntó al asesor que ampliara la información y *que se dejaba asesorar*. *Que no se acercó a ninguna oficina de esta entidad porque confiaba en que lo que le dijeron en la asesoría y no vio la necesidad de hacerlo.*

Adujo que se trasladó a Old Mutual en el 2012 *“buscando mejores intereses, para ganar mejor plata”* y que al ser Skandia una compañía internacional le daba más seguridad y certeza respecto a la solidez de sus recursos, pues *tenía miedo porque Colfondos iba a quebrar*. Añadió que conoce los requisitos para pensionarse en Colpensiones y cree que en Skandia solo basta con tener el capital para hacerlo. Que cuando cumplió 46 años de edad no recibió información por parte de Skandia de que ese era el momento límite para retornar al régimen de prima media.

Señaló que no recuerda si en el alguno de los traslados le fue entregada una cartilla con información clara sobre sus derechos y deberes. Indicó que desconoce el régimen de transición, que al realizar el traslado de régimen podría perderlo y también que le es ajeno el “año de gracia” que se dio en el 2004. Por último, explicó que el motivo para retornar al régimen de prima media es *sentirse engañada al haber creído en los fondos privados de pensiones porque realmente pensaba que tendría una buena pensión, pero se dio cuenta que en Colpensiones recibiría el doble que en el RAIS.*

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En tal contexto, es claro que al momento de suscribir el formulario de vinculación a HORIZONTE hoy PORVENIR, la demandante no fue informada sobre las implicaciones de su traslado, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión anticipada en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si el obtener una pensión a una edad inferior es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se les habló de modalidades de pensión, aspecto vital si tenemos en cuenta que en algunas categorías donde existe una renta vitalicia, el riesgo financiero y de longevidad lo corre una aseguradora y no la afiliada por lo que la heredabilidad del capital adquiere otros matices, dado que en caso de muerte ostentando la calidad de pensionada y ante la inexistencia de beneficiarios, el capital de la cuenta de ahorro individual es inexistente al ser utilizado para el pago de una prima única por lo que ningún monto engrosa la masa sucesoral.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que tuviese claridad que el monto de la mesada estaba íntimamente ligado al cúmulo de aportes y rendimientos que lograra alcanzar durante su vida laboral

Por consiguiente, es claro que era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora Vergara Galvis, quien en el año 2000 se vinculó a

Horizonte hoy Porvenir, el 26/04/2001 se trasladó a Colfondos (fl 369), el 01/03/2010 se afilió a SKANDIA (fl 192), el 14 de febrero de 2011 regresó nuevamente a Colfondos y el 16/03/2012 se afilió otra vez a SKANDIA, siendo este el fondo donde actualmente permanece, como se puede observar en los folios 155, 192, 369 y 367 del archivo 01 del expediente digital. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces de la demandante, fue precisamente lo que sucedió, donde la solidez era un factor determinante, aunado al temor de perder los aportes efectuados con el extinto ISS.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada por el a quo, quien ordenó a SKANDIA devolver TODOS los dineros percibidos por el fondo con motivo de la afiliación, precisando que ello implicaba el retorno de los tres ítems que componían los gastos de administración, orden esta última que extendió a COLFONDOS y a PORVENIR por el tiempo que la actora permaneció afiliada en dichos fondos.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es SKANDIA, ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en COLFONDOS y en HORIZONTE hoy PORVENIR.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(…) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(…)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en

el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Respecto de la inconformidad presentada por PORVENIR en el recurso de alzada frente a la imposibilidad de retornar las cuotas de administración en tanto a su juicio había operado el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN, habrá de señalarse que ya la Corte se ocupó del tema cuando mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de revertir el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras y administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el *a quo*, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales *en cualquier tiempo*, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).

En tal contexto, no sería dable acoger los razonamientos de la AFP en este punto, máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivados de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Skandia, Porvenir y Colfondos respecto del tiempo de permanencia en cada uno teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, todas las administradoras del RAIS accionadas deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **ADICIONARÁ** el fallo.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Ahora bien, en cuanto a solicitud del recurrente de exonerar de las costas a Porvenir, resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición fue morigerando en casos en los que no había sido la conducta de la entidad la que originó el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier decisión de Colpensiones tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichosa, sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio se adoptó con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas.

Mutatis mutandis, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones, no así respecto de las administradoras del RAIS accionadas, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de aquellas en el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razón que aunada a las que preceden impiden a esta Magistratura extender a PORVENIR el criterio de exoneración de costas, pues pervive para la misma ese deber de información, cuyo cumplimiento no acreditó.

Por último, frente a la medida cautelar impuesta por el a quo a Colpensiones consistente en la imposibilidad de negar o retardar el reconocimiento de la pensión de vejez a la que eventualmente tuviese derecho la actora, aduciendo NO haber recibido de la administradora del RAIS el pago de los conceptos a su cargo (entiéndase cotizaciones, rendimientos, cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima), medida cautelar a la que se opuso la entidad y en ello enfocó el recurso de alzada, recordando que la pensión de vejez no comportó una

pretensión, y en todo caso, cuando mediaba un traslado de régimen y posterior retorno, administrativamente tenía que agotar determinados procedimientos antes de proceder a su otorgamiento.

Para efectos de resolver la dubitativa planteada, bastaría con remitirnos a la norma que en materia laboral contempla la figura, es decir, al art. 85 del CPT y la SS, de cuya lectura NO se percibe un fundamento que justifique su imposición. Dice el legislador que la medida cautelar procede cuando un demandado efectúa actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pero ni lo uno ni lo otro sucede en este caso. Recientemente la Corte Constitucional mediante sentencia C-043 de 2021 declaró EXEQUIBLE de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad, en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el *"c", numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso*. No obstante, aunque la norma en mención autoriza al juez a imponer cualquier tipo de medida, estima que la misma debe ser razonable para la protección del derecho en litigio o asegurar la efectividad de la pretensión y es ahí cuando surge un primer obstáculo.

Al NO comportar la pensión de vejez objeto de súplica, ni haber sido un asunto debatido en el proceso respecto del que las partes hubiesen ejercido el derecho de defensa, no era dable su análisis, mucho menos la concesión una medida cautelar para proteger un eventual derecho.

Ya la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema en múltiples ocasiones, entre ellas cuando en sentencia de radicación 58.621, rememorando algunas que le antecedían, señaló que:

En efecto, la causa petendi de la demanda inicial está conformada por las razones de hecho y de derecho que fundamentan las pretensiones, y el sentenciador conforme al principio de congruencia, no puede alterar o cambiar los hechos o las súplicas para entrar a decidir en uno u otro sentido, y darle la razón al demandante o al demandado. En materia laboral, la congruencia encuentra una excepción, en cuanto a que la ley permite que los juzgadores de única y primera instancia fallen en torno a súplicas distintas a las pedidas, haciendo uso de las denominadas facultades extra y ultra petita que consagra el citado artículo 50 del CPTSS, cuando los hechos que las originen hayan sido discutidos en el proceso y están debidamente probados, facultad que también tiene el fallador de segundo grado, cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.

En este orden de ideas, si no fue debatido el punto, ello vedaba al operador jurídico de algún pronunciamiento, ya que, se insiste, NO puede sorprenderse a la parte resistente examinando asuntos que en un principio no fueron puestos a consideración del juez ni mucho menos se delimitaron al fijar el litigio. Tampoco se trata de examinar la procedencia de un derecho mínimo e irrenunciable, pues NO es la pensión lo debatido.

Aunado a lo anterior, razón le asiste a Colpensiones cuando destaca la importancia de agotarse previamente algunos trámites con antelación al reconocimiento de la eventual prestación por vejez, como lo es la actualización de la información reportada al SIAF y el traslado de la información, obligaciones a cargo de Porvenir, de lo contrario ni siquiera contaría con la base de datos para efectos de contabilizar las semanas pues en la historia laboral evidentemente sólo figuran las aportadas al régimen de prima media, no así al RAIS.

En todo caso, NO se trata de establecer si el pago de la pensión está sometido al recaudo efectivo, pues tal análisis sería procedente si la prestación por vejez comportase una pretensión, lo que en este caso NO ocurre, ni tampoco fue un hecho discutido.

Visto así las cosas, se **REVOCARÁ** la decisión a través de la cual se impuso a Colpensiones la aludida medida cautelar.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema **ADICIONÁNDOLA y REVOCÁNDOLA** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a COLFONDOS y PORVENIR a favor de la demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. Dicha condena NO se extenderá a Colpensiones dado que fueron acogidos en esta instancia los planteamientos esbozados en el recurso de alzada.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **MARIA CRISTINA VERGARA GALVÍS** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 41.627.657 contra **COLFONDOS S.A., SKANDIA S.A., PORVENIR.S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: ADICIONA los numerales segundo, tercero y cuarto del fallo, bajo el entendido que las AFP al momento del pago, deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCA la medida cautelar impuesta a Colpensiones.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARIA CRISTINA VERGARA GALVÍS**
Demandado: **COLPENSIONES, COLFONDOS S.A., OLD MUTUAL hoy SKANDIA S.A. y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: **05001-31-05-004-2017-01050-01.**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **30/06/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **04/07/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario